

CIUDADES ARGENTINAS HACIA UN DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Introducción

En un marco internacional de capitalismo globalizado y de grandes desequilibrios económicos, sociales y ambientales a nivel mundial, el desarrollo de los países se ve condicionado por la necesidad de hacer frente a las nuevas demandas sociales del siglo XXI; principalmente vinculadas al desarrollo de las grandes ciudades, superando el desajuste entre los procesos de crecimiento económico y los de urbanización, entendidos como la construcción de ciudad en sentido amplio.

Históricamente, los grandes centros urbanos son los que concentran la mayor cantidad poblacional y, en principio, la mayor cantidad de habitantes de clase media, que ha crecido en la última década, en toda América Latina, según datos del Banco Mundial, en un 50%.

En nuestro país, según el último Censo, en la Región Metropolitana de Buenos Aires (conformada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más 40 distritos de la Provincia), por ejemplo, habitan 14,8 millones de personas. Estamos hablando del 37% de la población del país desplegada en solo el 1% de su superficie, o el 80% de la población de la Provincia en un 4% de su territorio. Tal es así, que constituye el segundo aglomerado más grande de Sudamérica y concentra 50% del producto bruto interno.

El escenario político y económico actual nos exige desde nuestro rol de oposición, retomar las banderas del peronismo, actualizar nuestra doctrina y reflexionar acerca de las demandas propias de un tiempo que avanza a pasos vertiginosos. Lograr propuestas concretas que solucionen los problemas propios de las grandes ciudades.

En otras palabras, tomar un rol activo como oposición, implica escuchar las demandas actuales y generar a partir de ellas nuevas políticas públicas que permitan orientar algunos procesos urbanos críticos.

El Justicialismo es el movimiento político y social que creó un nuevo paradigma en la concepción de la realidad Argentina y mundial. Más aún, conceptualizó ideal y materialmente a la humanidad, integrando el progreso material con el espiritual. Su importancia no solo radica en los conceptos, sino además en sus prácticas. Siguiendo a Juan Domingo Perón, no puede haber un divorcio entre pensamiento y acción.

Por eso, alcanzar la justicia social significa generar oportunidades para que todos los argentinos puedan trabajar por su bienestar y por nuestra patria.

El desafío es avanzar en las mejores condiciones de vida y crear un nuevo espacio urbano: mejor ordenado, más seguro, más competitivo productivamente y más limpio. Ciudades donde la sociedad viva en comunidad, donde pueda disfrutar del espacio público y se beneficie de la vida urbana.

“Es muy difícil que un hombre se realice en una comunidad que no se realiza”.

Juan D. Perón, 1949

La cuestión urbana: problemáticas de las ciudades

Ciudades para residir

Si tomamos en cuenta “lo habitacional” en sentido amplio, las variables centrales de este problema son la disponibilidad del suelo, la vivienda, la infraestructura y la movilidad que permite conectar empleo, estudio y vivienda, ocio, entre otros factores.

A pesar de las políticas públicas de los últimos años, la **disponibilidad de suelo a precios accesibles** se transformó en un nudo crucial del problema del hábitat. En este sentido, se vuelve innegable la necesidad de mejorar las capacidades provinciales y municipales para planificar y regular el uso del suelo.

En tal sentido, el **déficit habitacional** es una de las grandes preocupaciones. En los últimos años se han producido considerables avances en este ámbito, pero aún falta un largo camino por recorrer, más aún cuando el Gobierno no pareciera dar respuestas en ningún sentido a esta problemática.

En la provincia de Buenos Aires, el déficit habitacional se estima en aproximadamente 530.000 viviendas y, sumado a ello, alrededor de 600.000 que requieren algún tipo de readecuación para estar en condiciones habitables.

Asimismo, las características del cambio de época en el que nos toca vivir hacen que hablemos de nuevos derechos. Derechos humanos esenciales para la vida y la dignidad de los pueblos, como sostiene el Papa Francisco. El acceso al agua potable es uno de ellos.

Los avances en dotación de **agua y cloacas** en todos los rincones del país que se produjo en los últimos años no fue suficiente para cumplir con las Metas del Milenio de la ONU con las cuales nuestro país se había comprometido para el 2015: reducir en todo el territorio 2/3 del déficit que había en el año 1990. Diez provincias Argentinas no llegaron a la meta en agua y 19 no lo hicieron en cloacas.

Por otro lado, la **inseguridad** es otra de las grandes preocupaciones de la población urbana, afectando la calidad de vida de las personas. Casi todas las ciudades de nuestro sistema urbano atraviesan un incremento de la violencia. Sabemos de la multicausalidad del fenómeno, -principalmente asociado a la falta de educación, a la falta de empleo y, en síntesis, a la desigualdad de oportunidades-, sumado al peso de la criminalidad organizada, pero es importante asegurar desde la gestión urbana el mejoramiento no solo de los mecanismos de control sino de todas las formas de disminuir el miedo ciudadano por deterioro del espacio público o falta de accesibilidad.

En este sentido, la prevención es mucho más que una función policial, es la obligación del Estado para que los ciudadanos vivamos en paz y podamos disfrutar del espacio público.

Desde nuestra perspectiva, asumir el compromiso con la seguridad pública implica atender dos cuestiones fundamentales: por un lado lo urgente y más inmediato, porque muchas veces está en juego la vida humana. Por el otro, aspectos profundos que exigen cambios institucionales y culturales en períodos más prolongados; es decir, políticas de mediano y largo plazo. En esta línea, la inclusión y el trabajo digno son la mejor política de seguridad.

Otra de las grandes problemáticas tiene que ver con la movilidad. Todas las ciudades están sufriendo el enorme crecimiento de la motorización individual. La respuesta más común de los gobiernos es la promoción del transporte público y la disuasión al privado.

El sistema de transporte influye fuertemente en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo productivo de una región. Por eso, exige una comprensión integral que permita conceptualizarlo como una política pública multidimensional.

Finalmente, la falta de instrumentos para regular la urbanización promueve una **forma insostenible de crecimiento de las ciudades**. Asentamientos informales y barrios cerrados se van salpicando en las periferias de la mayoría de las ciudades intermedias o grandes, expandiendo el área urbanizada de modo exponencial.

En el Conurbano Bonaerense, se estima que 1 millón de personas viven en 871 villas y/o asentamientos precarios.

Desde el peronismo, sostenemos que el derecho a la ciudad y el acceso justo al hábitat son centrales. Por eso, se vuelve necesario generar políticas públicas específicas tendientes a la urbanización de villas y asentamientos precarios, principales exponentes de la desigualdad social y territorial de las grandes ciudades.

Ciudades como soporte para el desarrollo económico

En las áreas con mayores niveles de industrialización (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba), **las ciudades conviven con una plataforma industrial en general antigua**, inserta dentro del área urbanizada y en permanente conflicto con los usos residenciales por razones ambientales y logísticas, y con escasas condiciones para modernizarse tecnológicamente.

Por otro lado, en las últimas décadas el **crecimiento del parque automotor** y el aumento de nuevos patrones de crecimiento, hicieron aparecer un nuevo tipo de centros en las grandes ciudades, a la vera de las nuevas autopistas. Hecho que obliga a buscar modos de integrar los viejos y nuevos centros a través del transporte, de manera tal que disminuya ahí también la diferenciación urbana.

Asimismo, las **ciudades con puerto** son un espacio privilegiado para el fortalecimiento de cadenas de valor que multipliquen la actividad económica y los puestos de trabajo. Sin embargo, muchas de estas ciudades atraviesan enormes

dificultades para organizar adecuadamente los sistemas de ingreso y egreso a los puertos y los centros de transferencia de cargas, y para asegurar una convivencia razonable con los otros usos urbanos.

Pocas actividades resultan tan determinantes para la organización de la ciudad como sus puertos. Todo un enorme sistema logístico y la localización de parte importante de la industria dependen de la ubicación y organización de los puertos.

Ciudades: entre ambiente y urbanización

El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él mismo ha creado. Juan D. Perón, 1972

El manejo de los residuos es probablemente el conflicto ambiental más severo de nuestras ciudades. A pesar del desarrollo de numerosos programas nacionales no se logran todavía avances consistentes.

Es necesario tomar noción de que las mejoras del sistema insumen mayores costos y debe definirse cómo y quiénes los afrontarán. Es fundamental que los planes que se realicen atiendan al ciclo completo de la basura, desde la generación hasta la disposición final con todos sus pasos intermedios.

En Argentina se genera un total de 12.325.000 de Tn/ año. El mayor generador es la provincia de Buenos Aires, con 4.268.000Tn/año.

La generación de basura del total de la población de la Provincia representa 35,2% del total del país.

Paralelamente, es muy amplia la agenda para asegurar calidad del agua, suelos y atmósfera. Debe asegurarse el funcionamiento de comités de cuenca especiales para los tramos urbanos de los cursos de agua que permitan organizar la intervención de las distintas jurisdicciones para regular vuelcos, planificar extensión de redes cloacales y de agua, y regular el manejo de aguas subterráneas.

Las empresas más contaminantes del país y de la provincia de Buenos Aires se encuentran en el Conurbano, cerca de sus principales cuencas hídricas. Los ríos y arroyos de la Provincia reciben a diario un promedio de 368.000 metros cúbicos de residuos industriales.

Por otro lado, una noción actualizada de los espacios verdes no incluye solamente el espacio recreativo (parques regionales, parques locales, plazas, plazoletas), sino todos los espacios de valor ecológico que deben ser preservados del proceso de urbanización.

Asimismo, son numerosas las ciudades que tienen serias amenazas por inundación pero es muy escasa la noción que tienen las comunidades sobre el riesgo en cada zona.



La problemática de las inundaciones es de larga data y se vincula con el incremento de lluvias, producto de un fenómeno climático cada vez más cambiante del que ninguna ciudad está exenta.

Promesas de campaña y ciudades invisibles

En primer lugar, debemos tener claro que todos los desajustes políticos, económicos, sociales y culturales tienen su manifestación concreta en la vida urbana, porque esta es la expresión totalizadora de la vida cotidiana de la mayoría de las personas, de las familias y de los pueblos.

Desde que Macri asume la presidencia en diciembre de 2015 a la fecha, se han tomado por parte del Gobierno diferentes medidas que encuadran perfectamente en un **plan de ajuste** como los que ya padeció nuestro país en otras ocasiones producto de gobiernos liberales. Se trata, nuevamente, de un modelo económico y social de especulación financiera, desindustrialización y endeudamiento externo.

Un “**gobierno para ricos**” como el que propone Cambiemos tiene como consecuencia directa la desintegración social. A diferencia de nuestro posicionamiento político, en donde apuntamos a construir y afianzar una fuerte integración social de la mano del desarrollo industrial del país, tal como lo hizo Perón, las políticas del macrismo no avizoran otro horizonte más que un aumento considerable de las desigualdades sociales con todas las consecuencias que eso implica.

En la plataforma electoral del año pasado, el Pro mencionaba como uno de los pilares del desarrollo, el ordenamiento macroeconómico:

Nuestro gobierno buscará normalizar la economía y sentar las bases para el desarrollo de largo plazo. Esta normalización no va a impactar negativamente en sectores

económicos ni en sectores sociales específicos; se puede lograr progresivamente y de forma que promueva el bienestar general y el progreso de todos.

Sin embargo, desde el primer momento, las medidas económicas tomadas por el Gobierno impactaron directamente en el salario y el poder adquisitivo de las clases más vulnerables y de los sectores medios.

Se unificó el tipo de cambio y se eliminaron las retenciones a las principales producciones agrícolas sin considerar sus consecuencias negativas sobre los distintos sectores productivos. Otras medidas, como la quita de subsidios en las tarifas de ciertos servicios como agua, luz o gas, fueron realizadas de forma compulsiva y sin una planificación que contemple las demandas y necesidades de la población.

Por otro lado, de diciembre 2015 a mayo de 2016, en seis meses de gobierno, **destruyeron 128.294 puestos de trabajo**. Un promedio de 20.000 nuevos desocupados por mes.

Asimismo, según el INDEC **los precios al consumidor crecieron un 28,4%** (en el área metropolitana, porque por ahora no se publican datos nacionales) en el mismo período, lo cual refleja una caída del poder de compra del salario muy importante, en solo seis meses.

La industria, uno de los sectores más golpeados, se encuentra ya en un contexto recesivo, según estimaciones de consultoras privadas, analistas y organismos del Estado que coinciden en este diagnóstico.

A su vez, preocupa la situación de las PyMEs, cuya producción cayó 1,5 % en mayo, según datos de la CAME.

A este panorama hay que sumarle que las medidas macroeconómicas tomadas por el Gobierno en los primeros meses produjeron **1,4 millón de nuevos pobres**, según datos publicados por el Observatorio de Deuda Social de la UCA.

En este marco de políticas de ajuste, que solo benefician a pequeños sectores de la sociedad, el grueso de la población nacional ve cada vez más privado su derecho a condiciones dignas de vida y al acceso a la ciudad.

La realidad apunta a un creciente achicamiento del Estado y de su responsabilidad con la cuestión pública, por lo cual, serán cada vez más escasos los esfuerzos por una planificación y un ordenamiento territorial del país y de las grandes ciudades. Mientras tanto, las principales problemáticas urbanas comienzan a profundizarse: la inseguridad, el desempleo, la vivienda y el transporte.

Una de las grandes preocupaciones de la población urbana es el acceso a la vivienda. En la campaña, el Pro sostenía un discurso prometedor:

Nuestro gobierno buscará reducir significativamente el déficit de vivienda a través de diversos ejes de acción. El problema va más allá de la vivienda, por eso la intervención debe comenzar por desarrollar el suelo urbano para la vivienda social e impulsar su tenencia formal con planes de ordenamiento locales a lo largo del territorio.

Sin embargo, hasta ahora no ha habido políticas públicas en este sentido más allá del relanzamiento del Plan Procrear, con cuestiones aún discutibles y supuestas “mejoras” del plan anterior, parado desde diciembre.

Al presentar el tipo de crédito que se implementará, el actual director de la Anses explicó que se requiere un “ahorro previo del 20 al 30 por ciento” del valor del inmueble y de paso recomendó a las familias que deseen acceder al crédito “hacer el esfuerzo de vender el auto” para poder pagarlo. Atrás quedaron promesas tales como urbanizar 100 villas por año o regularizar 750.000 escrituras de ciudadanos que tienen sus casas sin escriturar.

En sus ocho años de gestión en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Macri pudo dar solo 6.121 soluciones habitacionales, es decir, casi el 5 % de lo requerido. Es difícil que con esos niveles ejecutivos pueda generar una proyección positiva de las políticas de vivienda a nivel país.

Otra de las grandes preocupaciones, quizá la más alarmante o urgente, es la creciente inseguridad de los conurbanos, solapada por el control y manejo de la información en los medios hegemónicos de comunicación. El Gobierno prometió “además de reducir las tasas delictivas, recuperar la presencia integral del Estado en todo el territorio, potenciar la prevención social del delito, desarrollar un sistema integral de estadísticas criminales y diseñar e implementar un Sistema Nacional de Inteligencia moderno, democrático y operativo”. No obstante, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ocupa tiempo y recursos en perseguir a jóvenes tuiteros

por “amenazas terroristas”, en un hecho que roza lo tragicómico pero que, evidencia, no solo la falta de capacidad de gestión sino el foco banal de concentración de los recursos públicos del Estado.

Por otro lado, las decisiones políticas más notorias han sido la declaración de emergencia de la seguridad pública en todo el territorio nacional y el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, hechos que sin acompañamiento de políticas sociales que tiendan a solucionar los problemas estructurales de fondo, no apuntan más que a la militarización del espacio público.

Por último, en materia de infraestructura, uno de los caballitos de batalla de Macri durante la campaña ha sido el **Plan Belgrano**, un proyecto que busca concretar planes de infraestructura para el Noroeste y Noreste argentinos. Sin embargo, a ocho meses de gestión de Gobierno Pro, no hubo avances en este megaplan, y el titular de la Unidad Plan Belgrano, José Cano, se limita a pedir “paciencia” a los gobernadores y a echarle la culpa a la herencia recibida, una estrategia de persuasión que ya viene tornándose en costumbre.

Pilares para un desarrollo urbano sostenible

1. Impulsar estrategias de regulación pública del suelo urbano. Mejorar las capacidades provinciales y municipales para planificar y regular su uso.
2. Confluir hacia un único plan de viviendas de interés público con un abanico amplio de ofertas que permita explicitar niveles variables de crédito y subsidios, resuelva un único sistema de adjudicaciones, proponga una política urbana

homogénea para la localización de nuevas viviendas y organice una relación clara entre Estado, mercado y el sector de la construcción.

3. Impulsar una política de creación de espacios para residencia asociados a nuevas condiciones estructurales del transporte y la vialidad, cerca de nuevos y viejos centros urbanos.

4. Promover procesos integrales de urbanización de villas y asentamientos precarios que contemplen el acceso a suelo urbanizado y la integración socio-urbana y comunitaria.

5. Lograr convergencias concretas en cada ciudad para asegurar un crecimiento racional de la urbanización con adecuada provisión de servicios de infraestructura.

6. Impulsar la multiplicación de nuevos espacios para la Industria (parques industriales, sectores planificados, áreas de uso exclusivo) y promover la radicación de nuevos establecimientos como parte de una fuerte política de modernización y diversificación industrial.

7. Estructurar un sistema de grandes espacios verdes recreativos, áreas ecológicamente estratégicas y áreas protegidas no urbanizables que brinden esparcimiento y conformen una sólida matriz ambiental de las metrópolis.

8. Promover planes para el manejo de residuos que atiendan al ciclo completo de la basura, desde la generación hasta la disposición final con todos sus pasos intermedios.

9. Asegurar el funcionamiento de comités de cuenca especiales para los tramos urbanos de los cursos de agua que permitan organizar la intervención de las distintas jurisdicciones para regular vuelcos, planificar extensión de redes cloacales y de agua, y regular el manejo de aguas subterráneas.

*Documento elaborado por el Instituto Gestar, septiembre 2016.



www.gestar.org.ar